miento en vigor para llevar adelante políticas que defiendan una identidad política. En cierto modo, sus últimos trabajos de investigación siguen esta línea de tocar las puertas para abrir alguna vía que dé trascendencia jurídica a Euskal Herria como hecho o sujeto político. Con todo, su declaración de intenciones no se materializa con una puesta en directo como pintor de brocha gorda, sino más bien mediante puntuales pinceladas impresionistas. La temática se aborda a modo de manual de Derecho Público, y aunque alguno pueda discutir su acierto metodológico o pueda requerir más ejemplos procedentes del Derecho comparado internacional, si se encajan bien todas las piezas, el lector creará el puzzle.

En definitiva, desde su claridad realiza una valiosa aportación para los operadores del Derecho Político Constitucional, y la sensación que transmite es que constituye una propuesta de viaje que invita a más expertos jurídicos a unirse al debate sobre interrogantes latentes. Además, el valor de las aportaciones contenidas se hace mayor justamente en el contexto actual de las reflexiones planteadas sobre el futuro de la Unión Europea, del proceso independentista de Cataluña, y de las oportunidades de actuación y cooperación en Euskal Herria con la nueva Aglomeración del País Vasco francés. El devenir de los próximos eventos determinará si es éste un legado definitivo de su autor o se sienta obligado a prometer volver al estilo MacArthur.

Iñaki SERRANO LASA

DOI:

<https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.109.2017.1.18>

LÓPEZ RAMÓN, Fernando (coordinador): *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*. Ed. Instituto Nacional de Administración Pública, 2017.

Estamos ante un libro que integra los trabajos del proyecto de investigación sobre el régimen jurídico del patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica desarrollado durante el año 2016 por la Red Internacional de Bienes Públicos y que generó una serie de ponencias defendidas en la reunión de Bogotá (Colombia), del 15 al 17 de junio de 2016.

Como explica el coordinador, la citada red es una agrupación de equipos de investigación de universidades e instituciones académicas de Europa y Latinoamérica que abordan habitualmente el régimen jurídico de los bienes públicos a través de actividades de investigación, docencia y extensión.

En el momento de la publicación, han participado en dicha red equipos procedentes de los países que enunciamos a continuación, con los representantes y ponencias que también detallamos.

De España, F. López Ramón («Fuentes y concepto del patrimonio cultural en el ordenamiento español»); J.L. Bermejo Latre («La indeterminación y amplitud del concepto de expolio del patrimonio cultural español»); y C. de Guerrero Manso («La escasa y problemática regulación del patrimonio inmaterial en España»).

De Francia, Hubert Alcaraz («La protección del patrimonio cultural en Francia: del redescubrimiento a la valorización») y Olivier Lecucq («El régimen jurídico de las lenguas regionales en Francia: ¿derecho fundamental o elemento del patrimonio cultural francés?»).

De Italia, Valentina Giomi («Lo sviluppo del sistema di circolazione dei beni culturali pubblici e privati di interesse pubblico in Italia»).

De Portugal, Fernando Alves Correia & Bernardo Almeida Azevedo («O regime jurídico de protecção e valorização do património cultural em Portugal»).

De Argentina, I.M. de la Riva («La protección del patrimonio cultural en el Derecho Argentino»); P. O. Gallegos Fedriani («Patrimonio cultural, desamparo de los propietarios: un caso paradigmático en Argentina»).

De Colombia, H. Santaella Quintero («Bases constitucionales de la protección del patrimonio cultural en Colombia»); J. Pimiento Echeverri & A. Castro Rodríguez («El régimen del patrimonio cultural en Colombia. Una visión general desde el punto de vista normativo»); y C. J. Velásquez Muñoz («Intervención, protección y fomento del patrimonio cultural urbano en Colombia»).

De Costa Rica, Ernesto Jinesta L. («Régimen jurídico del patrimonio cultural en Costa Rica»).

De Perú, J. Danós Ordóñez («Régimen de los bienes integrantes del patrimonio cultural en el Perú»);

R. J. Martín Tirado («La protección del patrimonio cultural en el Perú: Balance y Perspectivas»); R. Huapaya Tapia («Las técnicas administrativas de protección del patrimonio cultural arqueológico en el ordenamiento jurídico peruano»); R. Jiménez Murillo («El sistema nacional de bienes estatales y el régimen jurídico del patrimonio cultural en Perú»); y O. Vignolo («Los bienes culturales peruanos y la revalorización de la intervención municipal»).

De Uruguay, A. Durán Martínez («El régimen jurídico del patrimonio cultural en Uruguay»); P. Schiavi («Régimen del patrimonio cultural en Uruguay: problemas y desafíos»); G. Ruocco («Patrimonio cultural y derecho de propiedad privada en Uruguay»); R. Ferrés Rubio («Los hallazgos arqueológicos como consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructura pública en Uruguay»).

Y de Venezuela, V. R. Hernández Mendible («Régimen jurídico del patrimonio cultural en Venezuela»).

Las aportaciones de los participantes europeos han girado en torno a la precisión del concepto de patrimonio cultural, su origen y evolución hasta los tiempos presentes, y otras nociones complementarias como el alcance de algunas de sus manifestaciones (los bienes culturales inmateriales) o el expolio de los mismos. Las contribuciones de los representantes latinoamericanos han versado sobre los elementos determinantes de la formación, trayectoria y significado actual del patrimonio cultural, explicando las características de las diferentes regulaciones nacionales.

Dada la amplitud de los trabajos integrados y la dificultad de sintetizar en las exiguas páginas de una resección la contribución al común de todos ellos, nos circunscribiremos a las ideas claves de los trabajos de los autores españoles.

El capítulo de F. LÓPEZ RAMÓN se centra, sobre todo, en la cuestión nuclear del alcance del concepto de patrimonio cultural. Destaca que la legislación española actual ha sido muy influenciada por la italiana, en la que ha prevalecido la concepción sustancialista de la Comisión Franceschini de 1967, que exige simplemente que el bien tenga por su naturaleza «valor de civilización», con independencia de que haya sido declarado formalmente como perteneciente a dicho patrimonio o no, de modo que tal calificación formal sólo tiene carácter declarativo y no constitutivo y, además, naturaleza reglada.

Así, la LPHE de 1985 parece haber seguido tal concepción desde el momento en que establece una integración genérica en tal patrimonio de determinados bienes *ex lege*, sin perjuicio de que después distinga entre los identificados mediante declaraciones administrativas (los del art. 1.3, a los que ofrece un estatuto pormenorizado) y los demás (respecto de los que parece limitarse a establecer reglas genéricas, como el enunciado de funciones de los poderes públicos, arts. 2-6; reconocimiento de la acción pública, art. 8; y obligación de conservación a cargo de los propietarios, art. 36.1).

El problema es entonces la amplitud del concepto derivado de la

extensión de la noción de cultura que nos ofrecen los diccionarios españoles; de las adiciones realizadas por la legislación autonómica (como la integración de bienes de interés arquitectónico, urbanístico, paisajístico y natural); y, sobre todo, de la expansión del concepto a los bienes inmateriales.

Además, en la opinión de LÓPEZ RAMÓN, no parece pertinente pretender la aplicación del régimen jurídico de los bienes materiales a la defensa de los elementos inmateriales, que explica por qué el legislador español ha acabado aprobando la Ley 10/2015, de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Postula este autor, en consecuencia, el establecimiento de sistema de patrimonio cultural de alcance conceptual más limitado, basado en la previa declaración formal de los bienes pertenecientes a la categoría o en el establecimiento de criterios claros de identificación de los bienes materiales afectados, siguiendo la tendencia de las normas de Derecho Internacional relativas a la restitución de los bienes culturales que han salido de forma ilegal de un territorio.

El capítulo de J.L. BERMEJO LATRE se centra en el concepto de expolio del patrimonio cultural. Destaca el autor que, a pesar de su definición recogida en el art. 4 de la LPHE («toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social»), el Derecho Español no ofrece un único concepto ju-

rido de expolio, sino que el mismo está en función de la rama del Derecho correspondiente que incide sobre la cuestión.

Y es que puede dar lugar a un ilícito civil (los posibles atentados de carácter civil que pueden cometerse contra la propiedad y/o la posesión de bienes, cuando incidan en los de carácter cultural), a un ilícito penal (tanto los delitos especiales contra el patrimonio histórico introducidos en los arts. 321 a 324 CP; como los delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico en general del Título XIII, todos ellos agravados si se cometen sobre bienes de valor «artístico, histórico, cultural o científico»; como el delito —urbanístico—, de construcción no autorizable en lugares de valor cultural; o como el delito de contrabando de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, recogidos en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 12/1995) o a un ilícito administrativo (las infracciones administrativas de los arts. 75 y 76 de la LPHE).

Si bien, el único elemento que ofrece más certeza es el proveniente del Derecho Constitucional, en tanto en cuanto el expolio implica la atribución de competencias ejecutivas al Estado en una materia en principio compartida y concurrente con las Comunidades Autónomas.

El autor acaba proponiendo una homogeneización del concepto normativo de expolio, con una mejor articulación de la normativa específica en materia de patrimonio (LPHE), los Códigos Civil y Penal y la citada Ley Orgánica 12/1995, de Represión del

Contrabando o, cuando menos, el necesario ajuste terminológico de tales textos, a la luz de las particularidades propias de cada ámbito normativo.

Concluye diciendo que la LPHE define el expolio como un concepto jurídico determinado que resulta literalmente indeterminado, al extenderse *in fine* a la perturbación del cumplimiento de la función social de los bienes culturales, que es una noción totalmente contingente. Resalta que es notablemente amplio («toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español») y, desde luego, más extenso que el concepto prejurídico (sustracción forzosa de la propiedad, acaso deslocalización) y finaliza destacando que tales indeterminación y amplitud del concepto de expolio son consecuencia de la indeterminación y amplitud del concepto de patrimonio cultural y coherentes con ésta.

El capítulo de C. DE GUERRERO MANSO se dedica a la regulación del patrimonio inmaterial en España.

Destaca la autora que la Ley 10/2015, que regula por primera vez con carácter integral el patrimonio intangible español, es una breve ley, con insuficiencia de contenido y asentada en un complejo escenario competencial.

Entre las características que lo singularizan, que determinan la necesidad de regularlo de manera específica, cita la autora dificultad de su protección derivada de su carácter vivo y

su constante evolución; la imprescindible implicación de la sociedad en la salvaguardia de las actividades, conocimientos y representaciones que conforman este tipo de patrimonio; y la controversia que suscitan algunas de sus manifestaciones por atender contra la igualdad de los hombres y la mujeres (festejos en los que sólo participar hombres en los elementos principales como el Misteri d'Elx o como el Alarde de Irún) o contra valores protegidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales (como las corridas de toros u otras fiestas taurinas o con otros animales, que generan sufrimiento a los mismos).

Finalmente, subraya cómo el insuficiente tratamiento y compleja problemática se han manifestado incluso en la STC 177/2016, que declara inconstitucional la prohibición de las corridas de toros en Cataluña (porque el Estado, que es competente para defender el patrimonio cultural ha declarado la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial y, por ello, la prohibición de las corridas de toros menoscaba su ámbito competencial). Y es que —resalta la autora— no se ha entrado de lleno en los problemas de fondo y competenciales que subyacen en esta materia, donde no sólo inciden los intereses contrapuestos aludidos, sino incluso otros como la libertad de empresa o la libertad de creación artística, que ni siquiera se mencionan en la sentencia.

Y, volviendo sobre la globalidad del libro, puede decirse que es muy rico en contenido sobre la materia que desarrolla y que ofrece múltiples

matices sobre la misma, puesto que engloba el tratamiento de múltiples autores de un gran elenco de países, con sus respectivas legislaciones y experiencia; lo que facilita un material muy valioso para los estudiosos y simples interesados en la misma.

José Antonio TARDÍO PATO

DOI:

<https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.109.2017.1.19>

RICO MOTOS, Carlos: *Deliberación parlamentaria y democracia representativa*. Congreso de los Diputados. Madrid, 2016.

En la Introducción del libro el autor señala con claridad el marco de su trabajo: la controvertida relación entre representación y democracia (página 16). Sigue así la estela de H. Pitkin que titula su artículo en términos inequívocos: *Representation and Democracy: Uneasy Alliance*. Sin embargo, H. Pitkin advierte que la relación entre ambos conceptos se ha revelado un tópico incuestionado, casi incuestionable, toda vez que la viabilidad de la democracia se ha condicionado a la representación. Admite la ilustre pensadora que ella misma se dejó ganar por esta tesis cuando escribió hace cincuenta años uno de los libros imprescindibles, *El concepto de representación*. Aconseja ahora superar el tópico y leer la expresión democracia representativa no como un axioma sino como una tensión. En efecto, «democracia representativa» ha sido interpretada como un oxímoron o como un pleonismo; una paradoja o una redundancia. El auge de la democracia deliberativa ha de